

TEMA 1: LA RESPONSABILITAT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. L'ACCIÓ DE RESPONSABILITAT. LA RESPONSABILITAT DE LES AUTORITATS I DEL PERSONAL AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

ARTICLES LLEI 40/2015, DE RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR PÚBLIC SOBRE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I RESPONSABILITAT DE LES AUTORITATS I DEL PERSONAL AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

CAPÍTULO IV

De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas

Sección 1.ª Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas

Artículo 32. Principios de la responsabilidad.

1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.

2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

3. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.

La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores:

a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4.

b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5.

4. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

5. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación

administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes:

- a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares.
- b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado.
- c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares.

6. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa.

7. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

8. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad.

El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.

9. Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Artículo 33. Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas.

1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas.

2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación.

3. En los casos previstos en el apartado primero, la Administración competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas, será la fijada en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio.

4. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente a la que se refiere el apartado anterior, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de quince días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente.

Artículo 34. Indemnización.

1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.

En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del artículo 32, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa.

2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.

3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas.

4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado.

Artículo 35. Responsabilidad de Derecho Privado.

Cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concorra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad.

Sección 2.ª Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas

Artículo 36. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.

1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.

2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.

3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.

4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2 y 3, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de los siguientes trámites:

- a) Alegaciones durante un plazo de quince días.
- b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de quince días.
- c) Audiencia durante un plazo de diez días.
- d) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a contar desde la finalización del trámite de audiencia.
- e) Resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días.

5. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa.

6. Lo dispuesto en los apartados anteriores, se entenderá sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes.

Artículo 37. Responsabilidad penal.

1. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente.

2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.

ARTICLES LLEI 39/2015, DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, SOBRE L'ACCIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

Artículo 67. Solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

1. Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el

derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.

En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32, apartados 4 y 5, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.

2. Además de lo previsto en el artículo 66, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante.

CONTINGUT EXPLICAT:

La responsabilitat de l'administració pública: característiques

La responsabilitat patrimonial de l'Administració pública és una institució jurídicopública reconeguda a l'article 106.2 de la Constitució espanyola (CE), i en virtut de la qual els particulars que pateixin una lesió en els seus béns o drets com a conseqüència de l'actuació i el funcionament d'un servei públic tenen dret, sempre que no tinguin el deure jurídic de suportar-la, a ser rescabats pels danys soferts per part de l'Administració pública titular d'aquell servei.

En definitiva, aquesta obligació de reparar els danys ocasionats per l'actuació de les administracions públiques s'engloba en l'obligació més genèrica, reconeguda en tots els sistemes jurídics, de reparar els danys causats a terceres persones.

La responsabilitat patrimonial es presenta, doncs, com una garantia dels particulars pròpia d'un estat de dret, adreçada a tutelar la integritat patrimonial dels administrats davant les intromissions no permeses dels poders públics, perquè si bé és cert que l'actuació dels poders públics, d'acord amb l'interès general, pot comportar en determinades ocasions el sacrifici dels interessos dels particulars, també ho és que quan aquest sacrifici representa una afectació dels interessos que els particulars no estan obligats a suportar d'acord amb la delimitació legal d'aquells drets i interessos, cal reparar el dany o danys que s'hagin causat.

El legislador ordinari estatal, mitjançant les lleis 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP) i 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), ha exercit la competència exclusiva que deté en matèria de procediment administratiu comú i del sistema de responsabilitat patrimonial pública.

Els pressupòsits de responsabilitat

El sistema de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques descansa en gran part al voltant de la noció de *lesió*, la qual ha d'anar acompanyada d'un seguit de requisits perquè es generi el dret a la indemnització. No en va, cal recordar que la responsabilitat extracontractual administrativa es caracteritza pel fet de ser una responsabilitat objectiva, allunyada per tant de la idea de la culpabilitat en l'actuació del subjecte causant, i que per aquest motiu el punt de gravitació del sistema s'ha d'estructurar al voltant de la naturalesa de l'acte que motiva la reclamació, més que no pas sobre la comprovació de la concurrència o no d'una actuació culpable del subjecte passiu.

És evident que aquesta lesió ha de reunir un seguit de característiques que la singularitzin, de manera que per poder exigir dany o lesió s'han de reunir els trets següents:

- ha de ser una lesió que generi un dany efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en relació amb una persona o grup de persones;
- a més, s'ha de tractar d'un dany antijurídic, i s'ha de poder imputar a una determinada administració pública o poder públic en una relació de causalitat que no es vegi afectada ni interferida per cap altra circumstància (intervenció de tercera persona o de la mateixa víctima, força major, etc.).

Els pressupòsits de l'existència de responsabilitat patrimonial per part de l'administració pública són:

- lesió rescabable
- antijuridicitat del dany
- relació de causalitat

L'acció en matèria de responsabilitat

Quan parlem de l'acció de responsabilitat patrimonial ens referim a l'actuació processal necessària que el particular ha d'exercir per poder exigir la reparació del dany causat davant l'Administració pública titular del servei públic que ha ocasionat presumptament el dany pel qual es reclama. Sense l'exercici d'aquesta acció, no és possible un pronunciament dels òrgans administratius i/o jurisdiccionals amb vista al reconeixement de l'existència de la responsabilitat patrimonial reclamada.

Com qualsevol altra acció processal o procedimental, han de concórrer un seguit de requisits que l'acció pugui prosperar. Aquests requisits són de caràcter subjectius, objectius i temporals o de l'activitat.

a. Requisits subjectius

Quan parlem dels requisits subjectius de l'acció, en realitat estem fent esment de la legitimació activa per a l'exercici de l'acció i de la legitimació passiva de qui resulta requerit per l'exercici de l'acció.

b. Requisits objectius

Pel que fa als requisits objectius de l'acció, cal fer referència, d'una banda, a l'objecte del procediment de responsabilitat patrimonial i, de l'altra, a l'exclusió d'altres qüestions alienes a l'objecte mateix del procediment.

Pel que fa al primer aspecte mencionat -l'objecte del procediment-, com a especialitat en els procediments de responsabilitat patrimonial, la llei determina específicament que és necessari que la resolució es pronunciï sobre l'existència o no de la relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i la lesió produïda i, si s'escau, sobre la valoració del dany causat, la quantia i el mode de la indemnització, quan escaigui.

Respecte al segon aspecte –exclusió d'altres qüestions alienes-, de manera conseqüent al que s'acaba d'exposar, el pronunciament de la resolució que posi fi al procediment ha d'excloure les qüestions o els plantejaments formulats per l'interessat que no siguin propis de l'objecte de l'acció instada.

c. Requisits de l'activitat o temporals

En matèria de responsabilitat patrimonial, la llei estableix que l'acció de reclamació, en concordança amb el caràcter extracontractual d'aquesta acció, prescriu al cap d'un any des del moment en què es produeix l'acte lesiu.

Aquest precepte estableix quin és el termini per exercir l'acció en els supòsits en què el procediment s'iniciï a instància de la part interessada, i que és el mateix termini de què disposa

L'Administració pública per al cas en què aquesta decideixi iniciar d'ofici un procediment de responsabilitat patrimonial.

La llei estableix de manera clara que el termini per exercir l'acció és un termini de prescripció, i no pas de caducitat, així, quan estem davant d'un termini de prescripció, estem davant d'un termini que és susceptible de ser interromput per l'exercici de determinades actuacions (no qualsevol actuació, article 1973 Cc), circumstància que determina que el termini torni a computar-se des de l'inici en el moment en què cessi la interrupció

En qualsevol cas, com s'assenyalava, la llei procedimental estableix quin és el termini de què disposa el particular per exercir l'acció reclamatòria enfront de l'Administració pública, que és un termini de prescripció d'un any des del moment en què té lloc l'acte que motiva la indemnització o se'n manifesten els efectes lesius.

Per tant, aquest és el moment en què neix en el patrimoni del particular el dret subjectiu a exercir l'acció per plantejar una reclamació adreçada a obtenir una declaració d'existència de responsabilitat per part d'una administració pública (o d'un altre poder públic) lesiva dels seus drets i interessos legítims. És la data en què comença a transcórrer el termini prescriptiu d'exercici de l'acció reclamatòria. Un cop determinat el dia en què s'inicia aquest termini, queda també determinat, *a priori*, quin és el darrer dia del termini per plantejar vàlidament, a l'empara de la legalitat, la reclamació. I diem *a priori* perquè aquest termini, tal com s'ha exposat, pot ser susceptible de ser interromput, fet que determinaria, doncs, la variació de l'últim dia de l'exercici de l'acció.

No obstant això, s'ha de dir que la llei mateixa matisa aquesta regla general per determinar el dia inicial del còmput del termini d'exercici de l'acció en determinats supòsits, fonamentalment en funció del tipus de dany al·legat, o de l'activitat administrativa generadora del dany de què es tracti. Així, la norma estableix que en el cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini per exercir l'acció comença a comptar des de la curació o la determinació de l'abast de les seqüeles. O que en el cas que sigui procedent reconèixer el dret a indemnització per anul·lació en via administrativa o contenciosa administrativa d'un acte o disposició de caràcter general, el dret a reclamar prescriu a l'any de la notificació de la resolució administrativa o de la sentència definitiva que declari aquella anul·lació, segons correspongui. Finalment, en els supòsits de reclamacions de responsabilitat patrimonial a què es refereixen els apartats 4 i 5 de l'article 32 de la LRJSP (responsabilitat patrimonial de l'Estat legislador per lleis declarades inconstitucionals, o contràries al dret de la Unió Europea), el dret a reclamar prescriu a l'any de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat o en el Diari Oficial de la Unió Europea de la sentència que declari la irregularitat de la norma, segons correspongui.

La responsabilitat patrimonial de les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques

El sistema de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques i dels poders públics es basa en dos eixos determinants, com són: la determinació dels danys que es pretenen imputar a l'Administració pública titular del servei causant d'aquell dany i la concreció de a qui s'ha d'imputar el dany causat dins d'aquella organització.

No es pot oblidar que les administracions públiques són persones jurídiques, i que actuen mitjançant les persones físiques adscrites als òrgans i a les unitats administratives. Tal com està actualment configurada la institució de la responsabilitat patrimonial en l'ordenament jurídic espanyol, la imputació del dany causat com a conseqüència d'una acció administrativa o d'un poder públic no es fa directament sobre la persona autora de l'acció, sinó que la imputació recau sobre l'organització titular del servei causant. Per tant, qui respon del dany és directament l'organització pública en què presta serveis la persona autora de l'acció.

De conformitat amb el marc jurídic vigent, la responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques és regulada als articles 36 i 37 de la llei 40/2015, i es disposa expressament l'exigència de responsabilitat patrimonial d'autoritats i personal públic, en

el doble vessant de danys causats a terceres persones i danys ocasionats a l'Administració pública; la llei disposa també l'exigència de responsabilitat penal del personal al servei de l'Administració, així com la civil derivada del delictes, quan escaigui.

A títol explicatiu, cal recordar que, juntament amb aquestes modalitats de responsabilitat exigible a les autoritats i al personal al servei de les administracions públiques, l'ordenament jurídic estableix l'exigència de la responsabilitat administrativa o disciplinària, derivada de l'incompliment dels deures i de les obligacions pròpies del personal que comporten la comissió d'infraccions de naturalesa administrativa (faltes disciplinàries), modalitat de responsabilitat que no és objecte de tractament en aquesta unitat.

L'article 36 de la LRJSP regula l'exigència de responsabilitat patrimonial de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Aquest precepte, tal com ja establia la normativa anterior, regula els supòsits en què es pot plantejar l'exigència de responsabilitat patrimonial al personal al servei de les administracions públiques, que són:

- La responsabilitat patrimonial derivada pels danys ocasionats als particulars, com a conseqüència del funcionament dels serveis públics, en els casos en què l'Administració corresponent ja hagi indemnitzat aquells particulars, prèvia tramitació del procediment oportú;
- La responsabilitat patrimonial derivada pels danys ocasionats en els béns o drets de la mateixa Administració pública.

En ambdós supòsits, es tracta d'una responsabilitat civil extracontractual del personal al servei de les administracions públiques, per comportaments que no són constitutius de delictes, i tant si es tracta de responsabilitat extracontractual per danys ocasionats a terceres persones com si ho és pels danys ocasionats a la mateixa Administració pública, en tots dos casos l'autoritat o personal al servei de l'Administració ha d'haver obrat amb dol, culpa o negligència greus (gravetat referida tant a la culpa com a la negligència), aspectes que, de conformitat amb la norma, a més han de servir per determinar tant l'exigència de la responsabilitat com per quantificar, si escau, la indemnització exigida.

Interessa recordar que l'exercici de l'acció de regrés per part de l'Administració pública s'ha de dur a terme d'ofici i de manera preceptiva. Amb l'establiment d'aquesta exigència d'ofici de la responsabilitat patrimonial al personal i autoritats al servei de l'Administració pública, va desaparèixer l'acció directa dels particulars lesionats contra els funcionaris causants del dany que la Llei 30/1992, d'una manera ambigua, en la seva redacció originària, semblava que permetia.

Quant als requisits subjectius i objectius que han de concórrer per instruir i resoldre aquests supòsits de responsabilitat patrimonial, són els propis de la institució de responsabilitat patrimonial, i l'acció -tant la de regrés com l'adreçada contra el funcionari- s'ha d'exercir dins del termini d'un any des que es va produir el fet causant del perjudici (des del moment de la satisfacció de la indemnització als particulars lesionats o, si escau, des del moment de la producció dels fets danjosos en el patrimoni de l'Administració). A més a més, de conformitat amb l'apartat 4 de l'article 36 de la LRJSP, la llei determina quins han de ser els tràmits mínims que ha de contenir el procediment per exigir la responsabilitat corresponent, que s'inicia per acord de l'òrgan competent notificat a l'interessat (i que ha de contenir els tràmits següents: al·legacions, pràctica de la prova admesa i la que consideri adient l'òrgan competent, audiència, proposta de resolució i resolució de l'òrgan competent).

Finalment, cal dir que la resolució que resolgui el procediment plantejat posa fi a la via administrativa (art. 36.5 de la LRJSP), i queda oberta la via contenciosa administrativa a l'efecte d'eventuals impugnacions jurisdiccionals, sens perjudici de la possibilitat de plantejar de manera potestativa recurs de reposició davant l'òrgan administratiu que hagi dictat la resolució.

L'article 37 de la LRJSP regula l'exigència de la responsabilitat penal del personal al servei de les administracions públiques. En aquest punt cal tenir en compte, en primer lloc, que allò que regula aquest precepte realment no és l'exigència de responsabilitat penal pels actes il·lícits penals comesos pel personal al servei de les administracions públiques, sinó la determinació que la responsabilitat penal en què pugui incórrer aquest personal, així com la responsabilitat civil que, si escau, se'n derivi, s'ha d'exigir de conformitat amb la legislació que correspongui, és a dir, de conformitat amb les disposicions de la legislació penal.